Ciudad de México, 2 de mayo de 2018.

Versión Estenográfica de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Vamos a iniciar. Son ya, muy buenas tardes. Siendo las 12 con cinco minutos de este miércoles 2 de mayo del 2018.

Saludo a mi compañera y a mis compañeros Comisionados, y los cinco damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta Sesión y a todas aquellas que nos hacen el favor de seguirnos a través de la plataforma Nacional Digital del INAI.

Solicito, Secretario sea tan amable, le solicitamos al Secretario que verifique existe de quórum, por favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

Le informo que están presentes la y los Comisionados Óscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas y hago de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 21.2 de los Lineamientos que regulan las Sesiones del Pleno de este Instituto.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Secretario.

Así las cosas, compañera, compañeros.

Se declara abierta la Sesión. Con su venia, podemos solicitar al Secretario que nos dé, que nos haga favor de dar lectura del Orden del Día para proceder a aprobarlo.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Conforme a su instrucción, Comisionado Presidente.

Los asuntos a tratar en la presente Sesión son los siguientes:

1. Aprobación del Orden del Día y, en su caso, inclusión de Asuntos Generales.
2. Discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución que someten a consideración de este Pleno, la y los Comisionados ponentes.

3. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución de denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia que propone el Secretario de Acceso a la Información, correspondiente a la DIT 0041/2018, interpuesta en contra del Centro de Evaluación y Control de Confianza.

4. Presentación, discusión y, en su caso aprobación, del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto la participación de un Comisionado en el Sexto Congreso Internacional de Protección de Datos Personales a celebrarse del siete al ocho de junio de 2018 en Santa Martha, Colombia.

5. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto, la participación de dos Comisionadas en la 49º Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico del 25 al 27 de junio en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de América.

6. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto instruir a su representante legal para que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018.

7. Asuntos generales.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias, Secretario.

Compañera, compañeros si ustedes tienen alguna sugerencia que amerite condición de asunto general y de no haberlo, solicito Secretario, recabar la votación.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venía, Comisionado Presidente.

Se somete a consideración de la Comisionada y los Comisionados el Orden del Día para la presente sesión, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionado Guerra.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Sí, a favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor, también.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Queda aprobado por unanimidad el Orden del Día de esta sesión, sin que se hayan incluido Asuntos Generales.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: No hay acta, pasamos entonces directamente al segundo punto de proyectos de resolución, pero sobre datos personales.

Secretario, si es tan amable en dar cabal lectura para darnos por enterados de cuántos proyectos y de qué orden se van a resolver.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con gusto, Comisionado Presidente.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, me permito hacer de su conocimiento, de este Pleno, que hay 16 proyectos de resolución los que se propone tener por no presentados, sobreeser o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, de los cuales, seis de ellos corresponden a sobreesimientos por quedar sin materia, así como cinco proyectos de resolución los que se propone desechar por extemporáneos, que se encuentran listados en los numerales 2.3 y 2.4 del Orden del Día aprobado para esta sesión respectivamente.

En segundo término, repito dar cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de fondo que someten a consideración del Pleno para la presente sesión.

En los siguientes proyectos de resolución, el sentido que se propone es confirmar la respuesta del sujeto obligado, me permito señalar que todos los asuntos que se

leerán a continuación pertenecen a las siglas RRD del año 2018, salvo en mención en contraria.

De la Comisionada Kurczyn es el 0155 y 0240, ambos del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En los asuntos que a continuación se da lectura los proyectos proponen modificar la respuesta de la autoridad obligada.

Del Comisionado Presidente Acuña es el 0263 y sus acumulados y 0288 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, señora y señores Comisionados, doy cuenta del proyecto de resolución cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta del sujeto obligado, del Comisionado Monterrey es el 0276 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, señora y señores Comisionados, doy cuenta del proyecto de resolución cuyo sentido propuesto es ordenar al sujeto obligado dar respuesta, del Comisionado Guerra es el 0209 del Colegio de Bachilleres.

Finalmente, me permito comentar que con fundamento en el numeral 6.18, numeral 44 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, los Comisionados hicieron del conocimiento de la Secretaría Técnica del Pleno que emitirán votos disidentes en las resoluciones recaídas en los recursos de revisión identificados con las claves siguientes, son igualmente de las siglas RRD del año 2018, salvo mención en contrario.

El 0279 de la Secretaría de Educación Pública que propone a este Pleno el Comisionado Guerra, la Comisionada Kurczyn presenta voto disidente porque considera que debió admitirse.

En el 0378 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que propone a este Pleno el Comisionado Presidente Acuña, el Comisionado Guerra presenta voto disidente porque considera que debe admitirse.

Y en el 396 del Instituto Mexicano del Seguro Social que propone a este Pleno el Comisionado Monterrey, el Comisionado Guerra presenta voto disidente porque considera que debió prevenirse.

Con lo anterior, se da cuenta a este Pleno los votos disidentes señalados.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias, Secretario.

De no haber inconveniente, compañera y compañeros, vamos a solicitarle al Secretario que recabe votación para resolver así el bloque de los asuntos que ha enlistado, en materia de protección de datos personales.

Por favor, Secretario.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con gusto, Comisionado Presidente.

Están a su consideración los proyectos de resolución previamente señalados, por lo que le solicito a la Comisionado y Comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionado Guerra.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas: A favor, también

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos que fueron expuestas.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias. Ahora le solicito hacer lo propio, pero respecto del bloque de los asuntos que se refieren o se relacionan con el derecho de acceso a la información pública.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

Primero, doy cuenta a este Pleno de 25 proyectos de resolución en los que se propone tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, de los cuales 24 de ellos corresponden a sobreseimientos por quedar sin materia, que se encuentra listados en los numerales 2.3 del Orden del Día aprobado para esta Sesión.

Segundo, doy cuenta de cinco recursos de inconformidad que se encuentran listados en el numeral 2.5 del Orden del Día.

Tercero, procedo a dar lectura de los números de expediente de los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo que se someten a votación de este Pleno.

En este apartado se leerán asuntos de las siglas RRA del año 2018, salvo mención en contrario.

Los siguientes proyectos de resolución el sentido que proponen es confirmar la respuesta del sujeto obligado.

Del Comisionado Presidente Acuña, es el 1291, del Partido del Trabajo; el 1566, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y el 2071, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Del Comisionado Guerra: es el RIA 0050/2018, de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; el 1357, del Fondo Sectorial para la investigación y desarrollo tecnológico en energía; el 14 37, del Partido Movimiento Ciudadano; y el 1657, de la Procuraduría General de la República.

De la Comisionada Kurczyn: es el 1058, del Senado de la República; el 1423, de la Auditoría Superior de la Federación; y el 1738, de Liconsa, S.A. de C.V.

Del Comisionado Monterrey: es el 1384, de la Secretaría de Educación Pública; el 1544, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el 1664 y 1754, ambos de la Secretaría de la Función Pública; y el 1859, de la Comisión Federal de Electricidad.

Del Comisionado Salas: es el 2150, del Petróleos Mexicanos, y el 2180, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

En los asuntos que a continuación se les da lectura los proyectos proponen modificar la respuesta de la autoridad obligada.

Del Comisionado Presidente Acuña es el RIA 0044/2018, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; el 1416, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito; el 1731, de la Procuraduría General de la República; el 1816, del Instituto Nacional de Medicina Genómica; el 2051, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Del Comisionado Guerra, es el 1177, del Servicio de Administración Tributaria; el 1232, de la Agencia de Investigación Criminal; el 1337, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el 1362, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el 1497, del Partido del Trabajo; el 1587, de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito; el 1632, del Instituto Mexicano del Seguro Social; el 1652, de la Procuraduría Agraria; el 1787, del Consejo de la Judicatura Federal y el 1792, de la Procuraduría General de la República.

De la Comisionada Kurczyn, es el 928 de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; el 1543, de la Procuraduría General de la República; el 1923, del Instituto Nacional de Migración; del Comisionado Monterrey, es el 1439, del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 1509, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del Comisionado Salas, es el RRA 1322/16-Bis, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el 1770 de la Procuraduría General de la República.

Ahora, señora y señores comisionados, doy cuenta de los proyectos de resolución, cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta de los sujetos obligados.

Del Comisionado Presidente Acuña, es el 746 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el 966, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 1301, de la Secretaría de la Función Pública.

Del Comisionado Guerra, es el 1292, del Partido de la Revolución Democrática; el 1542, de la Procuraduría General de la República; y el 1757, de la Secretaría de la Función Pública.

De la Comisionada Kurczyn, es el 599 del Servicio de Administración Tributaria; del Comisionado Salas, es el RIA 0048/18, del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

El 1895, del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el 1905 y 1935, ambos del Instituto Nacional del Emprendedor, y el 1950, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Finalmente, me permito comentar que con fundamento en el numeral 6.18, del numeral cuadragésimo cuarto de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, los comisionados hicieron del conocimiento de la Secretaría

Técnica del Pleno, que emitirán votos disidentes y particulares en las resoluciones recaídas a los recursos de revisión identificados con las claves siguientes:

Me permito mencionar que, salvo mención en contrario, todos los asuntos que se leerán a continuación, son de las siglas RRA del año 2018.

Es el RRA 1322/16-Bis del Instituto Federal de Telecomunicaciones que propone a este Pleno por cortesía del Comisionado Salas; el Comisionado Guerra y el Comisionado Salas, emiten voto disidente, porque consideran que debe instruirse a dar acceso a la versión pública del expediente solicitado.

En el 1439 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que propone a este Pleno el Comisionado Monterrey, la Comisionada Kurczyn emite voto particular, porque considera que se debe entregar versión pública del escrito de demanda de amparo del juicio que se encuentra en cumplimiento, y que se reserve por artículo 110, fracción XI, los escritos de demanda de los nueve juicios pendientes de resolución.

El Comisionado Guerra y el Comisionado Salas presentan voto disidente porque consideran que debe entregarse versión pública de la demandas de amparo porque debe analizarse constancia por constancia si se actualiza la reserva.

En el 1478 del Partido de la Revolución Democrática que propone a este Pleno la Comisionada Kurczyn, el Comisionado Salas emite voto particular por desbordamiento de Litis.

En el 1664 de la Secretaría de la Función Pública que propone a este Pleno el Comisionado Monterrey, el Comisionado Guerra presenta voto disidente porque considera que la resolución debe clasificar con fundamento en el artículo 113, fracción I, y el Comisionado Salas emite voto disidente porque considera que no se actualiza la reserva por artículo 110, fracción XI.

En el 1757 de la Secretaría de la Función Pública que propone a este Pleno el Comisionado Guerra, el Comisionado Salas presenta voto disidente porque considera que la inexistencia es correcta. Mientras que la Comisionada Kurczyn presenta voto disidente porque considera que no debe clasificarse un pronunciamiento ya realizado.

En el 2083 de la Secretaría de Marina que propone a este Pleno por cortesía la Comisionada Kurczyn, el Comisionado Presidente Acuña presenta voto disidente porque considera que debe analizarse la respuesta complementaria toda vez que la Litis consiste en la entrega de información incompleta y, por ende, no admite un segundo recurso de revisión. Y la Comisionada Kurczyn presenta voto disidente porque considera que debe analizarse la respuesta complementaria.

En el RIA 0050/2018, de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí que propone a este Pleno el Comisionado

Guerra, el Comisionado Presidente Acuña presenta voto disidente porque considera que debe sobreseerse por improcedente.

En el RIA 0069/2018 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y sus municipios que propone a este Pleno el Comisionado Presidente Acuña, el Comisionado Guerra, la Comisionada Kurczyn y el Comisionado Salas presentan voto disidente porque consideran que debe admitirse. Señalo en este caso que, en virtud de que no reúne la mayoría el proyecto, se remite el recurso a la ponencia del Comisionado Guerra para su admisión y estudio.

Con lo anterior se da cuenta a este Pleno de los votos disidentes y particulares señalados. Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Mucha gracias.

Así las cosas, están a su consideración los productos de resolución. Tengo en lista a Patricia Kurczyn para escoger asunto y así, somos prácticamente cuatro compañeros los que vamos a subir asunto.

Tú inicias Patricia.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas gracias. Estoy haciendo los últimos ajustes.

Me gustaría, por favor, que se separara para que pudiéramos presentar a la discusión del Pleno el recurso número 599/2018 en contra del Servicio de Administración Tributaria. Por favor.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias.

El Comisionado Óscar Guerra.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: Buenas tardes, Comisionada y Comisionado.

Buenas tardes a la gente que nos hace el favor de seguir esta sesión del Pleno.

Le pediría para los mismos efectos el recurso 1232/2018 de la PGR, Agencia de Investigación Criminal, y el 1587/2018 de Nacional Financiera.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muy bien, Comisionado Guerra.

Comisionado Joel Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: Buenos días, compañera y compañeros de Pleno. Pediría por favor que se separen de la votación en bloque los recursos con la clave RRA 1905/2018 y 1935/2018 en contra del Instituto Nacional del Emprendedor y también pediría que se puedan presentar al mismo tiempo, lo hará un servidor.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias al Comisionado Joel Salas.

Y ahora un servidor solicita que el proyecto identificado con la clave RRA 0746/2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el recurso el RRA 1771/2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República, se voten individualmente una vez que sean discutidos.

De no haber comentarios adicionales por algún otro de mis compañeros Comisionados, entonces solicitaríamos al Secretario Técnico que proceda a recabar la votación respecto del resto de los asuntos que no resultaron separados para esta modalidad de exposición individualizada y de esta suerte sean resueltos en bloque.

Por favor, Secretario.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

Una vez mencionados los votos disidentes y particulares, me permito informar que se han separado siete proyectos para su discusión y votación en lo individual, que son los siguientes:

Es el RRA 0599/2018 del Servicio de Administración Tributaria, el RRA 0746/2018 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, RRA 1232/2018 de la Agencia de Investigación Criminal, RRA 1587/2018 de Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, 1771/2018, RRA 1771/2018 de la Procuraduría General de la República y los dos recursos de revisión del Instituto Nacional del Emprendedor RRA 1905/2018 y 1935/2018.

Por lo que están a su consideración el resto de los proyectos de resolución en los términos descritos y les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionado Guerra.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Gracias, Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor de todos los proyectos.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor, con las salvedades expresadas.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor, también.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Gracias. En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos que fueron expuestas.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Secretario.

Ahora, como corresponde, en el estricto orden cronológico, corresponde a la Comisionada Patricia Kurczyn, exponer o presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 0599/2018 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Gracias. Este asunto que me he permitido separar de la votación conjunta para que tengamos la oportunidad de analizarlo y de tener una votación de acuerdo al proyecto que estoy presentando, se refiere a una solicitud de información naturalmente en la que se comprende la copia certificada del oficio número 500-05-2017-2735 del 12 de abril de 2017 que contiene la notificación individual a una persona moral, el estatutos que guarda el procedimiento relacionado con dicho oficio, saber si ya se cuenta con resolución o si ya se desvirtuaron los hechos por parte de la empresa, copia certificada de la resolución definitiva en caso de contar con la misma y, finalmente, en caso de contar con resolución indicar el ejercicio fiscal al que corresponden, así como copia certificada de las operaciones que se hayan resuelto por el sujeto obligado como inexistentes y de las facturas que amparan esas operaciones.

Esta solicitud se relaciona con las observaciones que realizó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, conocido como ORFIS de Veracruz, que se hizo a la Secretaria de Turismo y Cultura del Estado como resultado de la

cuenta pública 2016, por supuestos pagos realizados de manera directa a la empresa Campimend Comercializadora, Sociedad Anónima de Capital Variable.

En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información como confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y artículo 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ya que al ser una autoridad fiscal quien la obtiene en el ejercicio de sus facultades, se encuentra en el supuesto de secreto fiscal.

Ahora bien, por lo que hace al oficio que contiene la notificación individual a la persona moral citada, la resolución emitida en el procedimiento en contra de dicha empresa, así como las operaciones que se hayan resuelto por el SAT como inexistentes y de las facturas que amparan dichas operaciones, se concluyó que se trata de información sobre la situación fiscal de la persona moral en específico, recabada por el sujeto obligado en ejercicio de sus atribuciones como autoridad fiscal, o bien suministrada por ésta en su calidad de contribuyente por lo que en principio se determinó procedente su clasificación en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de la materia.

No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acceso a la información como derecho humano está garantizado por el estado, está garantizada por la Constitución misma, y en el cual rige el principio de máxima publicidad, y como excepción a esta regla alguna información relativa a la vida privada, los secretos y los datos personales serán protegidos en los términos que fijen las leyes.

De igual manera, el acceso a información pública es, al mismo tiempo, una directriz entendida como un instrumento para conseguir la eficacia de otros valores que obligue a los operadores a generar toda clase de consecuencias en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En ese contexto tiene cabida, entre otros, el secreto fiscal, aunque con determinados límites.

Al respecto, es importante destacar que sobre este tema se localizó el documento denominado "informe del resultado de la fiscalización superior, Secretaría de Turismo y Cultura, Cuenta Pública 2016, Fase de Comprobación, del cual se desprende que se realizó una investigación a la empresa ya citada Campimend Comercializadora, S.A. de C.V., sin que pudiera localizarse en el domicilio fiscal señalado los comprobantes fiscales emitidos, ni a su representante, así como tampoco se encontró indicio alguno de la empresa señalada.

Asimismo, da cuenta de que la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Veracruz, no mostró evidencia de haber recibido los bienes y/o servicios facturados, por concepto de diseño y producción de carros alegóricos por temática autorizada, que fueron pagados durante el ejercicio 2016, por un importe de 5 millones y medio,

es decir, 5 millones 500 mil pesos, por lo que se detectó una irregularidad en la gestión financiera de dicha Secretaría, que hacen presumir la existencia de responsabilidad resarcitoria por un probable daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal.

En dicho informe también se destaca que el SAT emitió el diverso oficio número 500-05/2017-16234, en el que se observa que la empresa se encuentra dentro del supuesto de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales --esto es textual--, sin contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Al respecto es importante precisar que si bien la información contenida en el informe citado y la relativa al procedimiento llevado a cabo por el sujeto obligado, notificada a través del oficio del interés del particular, se refiere a ejercicios fiscales distintos.

También lo es que la diligencia de acceso a la información clasificada que se llevó a cabo, se advirtió que la información del interés del particular en el asunto que nos ocupa, también está relacionada con servicios prestados y comprobantes fiscales emitidos por la propia CAMPIMENT Comercializadora, S.A. de C.V., a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, es decir, guardan relación con la misma empresa y con la misma situación de irregularidad en la expedición de comprobantes fiscales.

Refuerza lo anterior, el hecho de que el procedimiento referido, donde obran los documentos solicitados por el particular, se relaciona con investigaciones realizadas a la persona moral citada, en virtud de un procedimiento de operaciones inexistentes vinculadas con el presunto tráfico de comprobantes fiscales y que según oficios publicados por el propio sujeto obligado en el Diario Oficial de la Federación, se informó que dicha persona moral, se encuentra en forma definitiva, en el supuesto previsto en el artículo 69, letra B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Además, la información del interés del particular, se encuentra relacionada, como ya se indicó, con servicios prestados y comprobantes fiscales emitidos por CAMPIMENT, Comercializadora, S.A. de C.V., a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, organismo público descentralizado de la Administración Pública de ese mismo estado.

Persona moral, cuyo patrimonio, entre otros, se integra por las aportaciones federales y estatales, es decir, están involucrados los recursos públicos, el ejercicio de recursos públicos.

A tomar en consideración tales circunstancias, en este caso, de conformidad con el artículo 155 de la Ley Federal de la materia se realizó una prueba de interés público tomando en consideración si se cumplían los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad correspondientes.

En ese sentido, encontramos que en el caso concreto se cumple con el elemento de idoneidad, ya que el interés público por conocer la información solicitada es mayor, dado que existe un fin válido para publicitar dicha información, pues tales actuaciones se encuentran relacionadas con el ejercicio de recursos públicos por parte de la Secretaría referida, recursos pagados a una persona moral que no fue localizada por la autoridad fiscalizadora.

Por lo tanto, se justifica un mayor control de la sociedad por conocer el actuar del sujeto obligado ante posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos que afectan a la Hacienda pública y, para evitar actos de corrupción y de uso indebido de recursos públicos, ya que el acceso a la información en esos casos implica, en el fondo, encontrar explicaciones de los actos llevados a cabo por determinados órganos del Estado y de servidores públicos. Es decir, una adecuada y pertinente rendición de cuentas sobre su actuar.

Al respecto, cabe señalar que en la tesis bajo el rubro: “Suspensión definitiva del amparo. Debe negarse cuando se solicite contra los efectos y consecuencias de la publicación de los nombres de contribuyentes a que se refiere el artículo 69 B, del Código Fiscal de la Federación”, el Poder Judicial de la Federación se pronunció sobre la necesidad de mantener pública información relacionada con los contribuyentes a que se refiere este artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, situación en la que se encuentra la persona moral referida, ya que dicho precepto tiene por objeto, por un lado, sancionar y neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de comprobantes fiscales, centrando la atención en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través del tráfico de comprobantes fiscales y, por otro, evitar un daño a la colectividad garantizándole el derecho a estar informada sobre la situación fiscal de aquellos con quienes realicen operaciones, a fin de que quienes hayan utilizado en su beneficio los comprobantes fiscales, puedan proceder a autocorregirse, o en su caso acreditar que la prestación del servicio o la adquisición de bienes fue verídica, destruyendo así, la presunción de inexistencia.

En ese mismo sentido, cobra relevancia lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 de nuestra Constitución Política, en la que se indica que la información relativa a la administración de los recursos económicos de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos, debe sujetarse al principio de transparencia.

Por lo tanto, el interés de proteger dicha información se ve superado por la necesidad de que la sociedad conozca la gestión financiera de la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Veracruz, así como el actuar de la autoridad fiscalizadora, en este caso, del sujeto obligado, máxime que fueron detectados elementos que un primer momento hicieron concluir al sujeto obligado que la conducta de la personal moral involucrada encuadra en lo establecido en el artículo 17-H, fracción X, inciso c) del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé que los certificados que emite el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos, cuando la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos por un contribuyente se

utilizaron para amparar operaciones inexistentes simuladas o ilícitas, por lo que se procedió a la cancelación de sellos digitales, impidiendo a la persona moral continuar con la facturación.

Por otra parte, se cumple con el elemento de necesidad toda vez que no existe un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información requerida para satisfacer el interés público por conocer los detalles de la gestión y el ejercicio de recursos públicos por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Veracruz, con respecto a los servicios prestados y comprobantes fiscales emitidos por la empresa referida, dado que en este caso el acceso a la información es el único medio con que cuenta el particular para allegarse de dicha información.

Asimismo, se cumple con el elemento de proporcionalidad que si bien se daría a conocer a terceros información sobre la situación fiscal de una persona moral plenamente identificada que permite conocer las operaciones realizadas de acuerdo a su actividad económica y que contiene datos obtenidos de las declaraciones presentadas por el contribuyente, en cumplimiento a sus obligaciones fiscales, así como información contenida en los diversos sistemas utilizados por el sujeto obligado y que fueron recabados en ejercicio de sus atribuciones como autoridad fiscal.

Lo cierto es que el sacrificio de la protección de dicha información se justifica en razón de que se satisface el interés público general de conocer el actuar de entes del Estado en el ejercicio y destino de recursos públicos, así como el actuar del SAT en relación con actividades irregulares o que representa un perjuicio para la Hacienda pública, es decir, el perjuicio que se causa con dar a conocer dicha información es menor al beneficio que se obtiene con su divulgación.

Se sostiene lo anterior, ya que resulta de mayor beneficio el conocer la información requerida en tanto que la persona moral en cuestión está situada en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación ya citado, relativo a contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios y que otorgó comprobantes fiscales a la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Veracruz por los servicios prestados a dicha dependencia.

Por lo que expuesto se concluye que la apertura de la información que se solicita tiene un fin constitucionalmente válido que es el derecho que tiene toda la sociedad de acceder a información sobre el ejercicio y destino de recursos públicos por parte de órganos del Estado, máxime si en dicho ejercicio se presume que existen irregularidades, lo que conlleva a la rendición de cuentas por parte de dicho organismo público sobre su actuación y exigibilidad de que las conductas constitutivas de hechos que contraviene al marco jurídico no queden impunes o al margen de discrecionalidad cuando al conocer el actuar del sujeto obligado, quien, conforme a sus atribuciones, es quien determina lo correspondiente.

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 155 de la Ley Federal de la Materia, se concluyó que se cumplen los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para dar prevalencia al derecho de acceso a la información sobre el sigilo que protegía la documentación en términos de la causal de clasificación prevista en la fracción II del artículo 113 del mismo ordenamiento.

Una vez apreciado lo anterior, se destaca que de la revisión de los documentos a los que se tuvo acceso, se advirtió que las investigaciones realizadas únicamente se encuentran relacionadas con operaciones realizadas entre la persona moral de referencia y la Secretaría citada, sin que se adviertan datos que pudieran hacer identificables a otros contribuyentes o que relevaran información que se encuentre fuera de las investigaciones en comento.

Finalmente me permito destacar el papel fundamental que juega el derecho de acceso a la información en asuntos como éste, en el que no sólo permite dar a conocer el actuar de los entes del estado, tanto de quien recibe y ejerce recursos públicos, como aquel que verifica que los mismos hayan sido ejercidos en el marco de la legalidad, investigando posibles irregularidades cometidas en detrimento de la Hacienda Pública, lo que permite un ejercicio de rendición de cuentas, que sin duda debe fortalecer la democracia y la legitimidad de las instituciones, además de cumplir con los objetivos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal de la materia.

En consecuencia, propongo a este Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle para que entregue al particular lo siguiente:

1, Copia certificada del oficio número 500-05-2017-2735 del 12 de abril de 2017 y del oficio 500-05-2017-38764 del 1º de diciembre de 2017.

2. Realice una búsqueda en la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con medios electrónicos de las operaciones que se hayan resuelto por esa autoridad como inexistentes y las facturas que aparan dichas operaciones realizadas por la Empresa Campimend Comercializadora, S.A. de C.V. y las entregue en copia certificada al recurrente.

Disculpen que me haya tomado tanto tiempo, pero el asunto verdaderamente requiere una explicación en ese sentido, que yo pongo a la consideración de todos ustedes.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias a la Comisionada Patricia Kurczyn que ha expuesto este asunto como todos los que se resuelven igual de importantes, algunos se escogen porque son referenciales o modélicos de algunas pautas de intervención, tanto de nosotros al resolver como de los sujetos obligados al responder, y de esa manera es que se escogen selectivamente.

Vamos a solicitar al Secretario Técnico, sea tan amable en recabar la votación.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

Se somete a su consideración, señora y señores Comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 599/18, que propone revocar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria.

Le pido al Comisionado Guerra, manifieste, por favor el sentido de su voto.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Desde luego es mi proyecto, a favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor también.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 599/18, en el sentido de revocar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias.

Secretario, a continuación le solicito, dar lectura, leer o referir síntesis del 746/18, interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que someto a consideración de los compañeros del Pleno.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con gusto, Comisionado Presidente.

Mediante una solicitud de información, un particular requirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la relación de los vuelos de la aeronave XC-RBR0902 Eurocopter, propiedad del Gobierno del estado de San Luis Potosí, durante los meses del 1 de enero al 30 de noviembre de 2017, en donde conste la salida, fecha y destino de cada uno de los vuelos.

En su respuesta, el sujeto obligado señaló que derivado de la cantidad de operaciones realizadas por las aeronaves, con marcas de nacionalidad y matrícula mexicana, así como extranjeras que vuelan en el territorio nacional, no cuenta con una relación por aeronave en la que se desglosen los datos como salidas, hora de salida, llegada, hora de llegada, fechas y matrícula.

Por ello, sugirió presentar su solicitud de acceso a la información al gobierno del estado de San Luis Potosí.

Inconforme con lo anterior, la particular interpuso recurso de revisión, manifestando como agravio la inexistencia de la información.

Visto el asunto en su conjunto, el Comisionado Presidente Acuña propone revocar la respuesta del sujeto obligado, y le instruye que realice una búsqueda en las áreas administrativas competentes de los planes de vuelo de la Aeronave XC-RBR0902 Eurocopter, propiedad del gobierno del estado de San Luis Potosí, durante los meses del 1 de enero al 30 de noviembre de 2017, y entregue al hoy recurrente el resultado de la misma.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias.

Yo quisiera traer a cuenta que este asunto se refiere, desde luego, ahora a una aeronave que se ubica o se plantea propiedad del gobierno de San Luis Potosí, pero que tiene en este caso conexión y por eso se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque naturalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes requiere la relación de vuelos de la aeronave, y nos lleva a un asunto que en su momento concitó en este Pleno diferencias importantes e inclusive en tratándose de la Presidencia de la República, fue motivo de una controversia que llegó a conocimiento de La Corte y la Suprema corte resolvió tajantemente dando por bueno o dándole valor de seguridad nacional a todo cuanto pueda ser el vuelo y las operaciones aeronáuticas de la flota, de las naves de la Presidencia de la República.

Muy distinto es el caso, y por eso creo yo que en congruencia a una posición que en su momento sostuvo y hemos sostenido una parte importante del Pleno, es que

en tratándose de otras aeronaves, sobre todo cuando el patrón de vuelo es eminentemente de supervisión de instalaciones propias del Estado, claro está, en este caso puede ser por tanto de los gobiernos de los estados pero que pasan por el control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de las aeronaves federales que haya y que son utilizadas por diversas dependencias, PEMEX, CONAGUA y, pues igualmente, la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando no, otras más que tienen helicópteros y aeronaves para supervisar instalaciones diversas en el país.

El patrón de vuelo ya se había obsequiado, es un término, obsequiar es en derecho o entregar o había dado, en realidad ya se había entregado porque otra solicitud de acceso a la información de otro reclamo informativo ya había sido vigente, ya se había tenido, ya se había resuelto en ese sentido, y ahora la Secretaría en este caso, acudió a una solución restrictiva por lo que, por supuesto que no cabe duda que los planes de vuelo sí son documentos mucho más amplios que las bitácoras, pero efectivamente en ellos aparece, indiscutiblemente una serie de elementos como son punto de partida, punto de llegada y, por supuesto también, la procedencia del lugar y el destino de la aeronave, que además, son inevitables porque son recurrentes las aeronaves que se utilizan para supervisar, o para vigilar o para detectar situaciones anómalas para el funcionamiento o para el mantenimiento de las instalaciones del Estado en su conjunto, se guían bajo patrones de vuelo, que es perfectamente entendible que sean, de alguna manera, semejantes.

Con independencia de ello, no se puede, a mi parecer, restringir la información relacionada con, porque esos planes de vuelo tienen un número enorme de datos, por ejemplo, la carga que transportó la aeronave, el número de pasajeros de la tripulación, el número; los nombres de la tripulación.

Por estado de fuerza hemos nosotros siempre protegido los nombres de los pilotos, de la aeronave porque tienen ellos, sí, una condición habitual de exposición que los hace vulnerables y esa es una discusión que se ha superado, pero precisamente muchas veces es para saber si subieron a las aeronaves personas ajenas a la institución.

También aparece, bueno, las distancias, la carga de cuando merecen, asistencia especial por alguna avería, algún tipo de problema de funcionamiento, como también la carga de combustible cuando se lleva a cabo antes o después del vuelo, etcétera, son cosas que parte todas de un plan de vuelo, como ya se había entregado plan de vuelo para este tipo de aeronaves, por eso resultó impactante que en esta ocasión se hubiese denegado.

Así es que nosotros consideramos o, yo considero, que de acuerdo a lo previsto en la ley, antes mencionada, la de aeronave, perdón, voy a mencionar la ley porque la omití, disculpen ustedes, está lírica, por eso pedí que me hagan el exhorto de la exposición ésta porque es, sí, la Ley de Aviación Civil establece que las aeronaves mexicanas se clasifican en civiles de servicio al público o privadas y de Estado, las

de propiedad o uso de la Federación distintas a las militares, las de los gobiernos estatales y municipales y las de las entidades paraestatales y las militares.

Al igual o de igual forma, dicha ley establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuente, entre sus atribuciones, con las de aprobar el plan de vuelo que previamente el operador presentará por escrito o transmitirá por vía telefónica, interfon, interfono, —dice así— frecuencia de radiocomunicación aeronáutica establecida o cualquier otro medio electrónico, conforme a las disposiciones administrativas que para tales efectos sean expedidas.

De acuerdo con lo previsto en la ley, antes mencionada, las aeronaves con matrícula XC corresponde a aviones al servicio del Estado, distintas a las militares, por lo que la operación de éstas dependen del ejercicio de recursos públicos y, ya dije, para fines eminentemente ligados al oficio público, a la gestión pública.

El plan de vuelo es la información detalladas relacionada con el vuelo intentado de una aeronave que se proporciona a una dependencia de control de tránsito aéreo.

Es importante señalar que el plan de vuelo contiene diversos datos tales como: el tiempo estimado entre escalas, fecha y hora de salida y destino final.

De lo antes expuesto se puede advertir que la documental que da cuenta de lo solicitado por la particular es el plan de vuelo de la aeronave, por lo que se puede concluir que el sujeto obligado realizó una interpretación restrictiva al requerimiento de información presentado por el hoy recurrente al no proporcionar la documental que atendía a dicha petición.

Sí, porque la petición era el listado, como quien dice: “A mí deme, a mí, pido las referencias de estos datos relacionados con los vuelos de esta aeronave”, pues sí, pero acuérdense ustedes que priva un principio que se interpreta como de pro persona y de máxima publicidad que el solicitante no tiene por qué saber las características técnicas o científicas de lo que pide, reclama información relacionada con, y corresponde al sujeto obligado ver que lo que pide está en esta documental o en este tipo de documento, pues bueno, procede darlo, procede entregarlo y no que lo haya requerido a veces con el tecnicismo específico con el que se manejan bitácoras o planes de vuelo u otros elementos que pueden contener esta información requerida.

En relación a la materia de la solicitud no pasa desapercibido que el recurso de revisión interpuesto en contra del sujeto obligado es través de sus alegatos, el, o sea, el sujeto obligado a través de sus alegatos indicó que de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Aviación Civil, las aeronaves con matrícula XE corresponden a aviones al servicio del Estado, distintas a las militares, por lo que la operación de éstas depende del ejercicio de recursos públicos.

Y atención a ello, entregó al particular versiones íntegras de los planes de vuelo de cinco aeronaves XE autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil en el periodo señalado a saber del 1º de enero al 22 de agosto del 2017

Es lo que yo les decía, que ya había un antecedente en el cual sí se habían entregado los planes de vuelo que ahora en esta ocasión no se han querido facilitar.

Por lo anterior, yo considero o propongo a ustedes revocar la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e instruirle a efecto de realizar una búsqueda en las áreas administrativas competentes, dentro de las cuales no podrá omitir a la Dirección General de Aeronáutica Civil de los planes de vuelo de la aeronave XE-RVR0902Eurocopter, propiedad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí durante los meses del 1º de enero al 30 de noviembre de 2017 --o sea, de agosto para acá es lo que está pendiente-- y que entregue al hoy recurrente el resultado de la misma.

Así es que, compañeras y compañeros, yo dejo aquí mi planteamiento, solicitando, les digo, revocar esta respuesta y que toca un punto que hemos discutido mucho, que las aeronaves en tratándose de éstas que son eminentemente para tareas oficiales no relacionadas con la seguridad nacional, y lo reitero, porque éstas solamente son otras y la Corte ha dicho claro "las que tripula el Presidente de la República", que es distinta la circunstancia, sino son aeronaves de uso cotidiano, recurrente y muy necesario para que el estado vigile y supervise trabajos de mantenimiento y de operación ordinaria o extraordinaria de las instalaciones del Estado Mexicano.

Así es que yo dejo en manos de mis compañeros y espero que me acompañen en este asunto.

Secretario sea tan amable en recabar la votación.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdoba Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

Se somete a su consideración, señora y señores Comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 0746/2018, que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Le pido al Comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdoba Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Es mi proyecto y no lo podría negar, tendría que ir a favor en cualquier circunstancia, y máxime cuando mis compañeros, todos, me acompañaron.

Muchas gracias.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 0746/2018, en el sentido de revocar la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias, Secretario.

Vamos a continuar con el orden de los asunto, y ahora corresponderá, si no me equivoco, al Comisionado Óscar Guerra, que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión 1232/2018, interpuesto en contra de la Agencia de Investigación Criminal, que somete a consideración de los integrantes del Pleno.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: Muchas gracias.

El particular pidió conocer de los años 2006 al 2017, información relacionada con el número de elementos que se han incorporado a la Institución.

También aquellos que han fallecido en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, solicitó se le informara el número de psiquiatras o psicólogos que han sido contratados para dar atención a los elementos de dicha agencia.

También solicitó el número de elementos que han requerido de cuidados paliativos por diversas enfermedades, y por último pidió se le informara el tipo de medicamentos o terapia que se ha brindado los elementos con trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad.

En respuesta a la Agencia de Investigación Criminal, informó que no es factible dar a conocer el número de elementos que se han incorporado a la institución, ya que dicha información tiene el carácter de reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción I de la Ley en la Materia, por estar relacionada con el estado de fuerza de la policía ministerial, y que de darse a conocer, causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de delitos, atentando contra las labores de combate a la delincuencia.

Por otro lado, dio a conocer el número de elementos fallecidos, 148 elementos fallecidos en actos de servicio, señalando que no es posible determinar si estos fallecieron en la lucha contra el narcotráfico.

Finalmente, respecto a las preguntas restantes, dijo no tener competencia, porque se orientó al solicitante para que se dirigiera a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, al ISSSTE, por ser los que pudieran contar con la información; tanto la clasificación como la incompetencia referida fueron sometidas a consideración del Comité de Transparencia del sujeto obligado.

El hoy recurrente presentó el recurso y el agravio de la parte recurrente, se encaminó a controvertir la clasificación y la información relacionada con el número de elementos que se han incorporado a la dependencia del 2006 al 2007, por sexo, grado y rango, pues considera que este tipo de información es pública, ya que no se refiere a los nombres de dichos elementos, ni domicilios particulares.

En alegatos, el sujeto obligado reiteró la clasificación y la información, argumentando que de dar a conocer la información solicitada se otorgarían datos relacionados con el número de policías con los que cuenta esta Institución para el combate a la delincuencia organizada, lo que revelaría su estado de fuerza.

Del análisis de esta resolución, se centró la información que clasificó el sujeto obligado, en virtud de que el agravio se enfocó a demostrar que las cifras solicitadas son de carácter público.

Al respecto, a consideración de esta ponencia, el número de elementos incorporados a la Agencia de Investigación Criminal, del 2006 al 2017, desglosado por sexo, grado y rango, no actualiza la causal de reserva prevista en la fracción I del artículo 110, en virtud de que no corresponde a una cifra total de policías ministeriales con las que cuenta la agencia, sino son el número de elementos que se han venido incorporando en el período de referencia, información que no revela el estado de fuerza que tiene para realizar sus funciones sustantivas, pues para que esto último ocurriera, sería necesario que se contara con un número total de policías ministeriales que había al 31 de diciembre de 2015, además del número de bajas ocurridas en ese periodo y así están en posibilidades de realizar operaciones aritméticas que dieran como resultado el número total de policías con los que cuenta la Agencia.

Aunado a lo anterior, la información solicitada no implica un desglose de asignación o ubicación en la que se encuentre cada uno de los elementos o, lo que en todo caso podría considerarse información reservada.

Por otro lado, no se advirtió de qué manera podría verse vulnerada o mermada la capacidad de reacción en el combate a la delincuencia que realiza el sujeto obligado, toda vez que no se estaría dando a conocer ningún protocolo de actuación ni información que se haya generado en el ejercicio de sus acciones de investigación o de inteligencia que ésta realiza.

De igual forma, se destaca que los elementos de la Policía Federal Ministerial operan bajo las instrucciones del Ministerio Público Federal, lo que significa que su actuar está supeditado a las órdenes que le sean giradas, como parte de investigaciones de una posible conducta ilícita, por lo que el objetivo de su función es la investigación de los delitos del orden federal y no en términos amplios resguardar la seguridad pública.

Lo anterior, sin que pasara por alto lo argumentado por el sujeto obligado al momento de formular sus alegatos en el sentido de que, revelarse la información previamente identificada con el número 1, que es el particular o personas con vínculos con la delincuencia organizada podrían entrever un aproximado de servidores públicos (...) a dicha agencia, pudiendo sacar una conclusión del personal con el que cuenta en la actualidad, revelando así su estado de fuerza.

Al respecto, se estimó que la consideración del sujeto obligado es infundada en tanto que aun, conociendo el número de ingresos y de bajas que se han registrado año por año no se arriba al número total de elementos con los que cuenta el sujeto obligado, pues ambas son cifras parciales que denotan una fracción de los miembros del personal y no el número total de elementos activos.

Aunado a ello, en diversa resolución emitida el 7 de noviembre del 2017, en el recurso 6324 del 17, el Pleno de este Instituto ordenó por unanimidad a la Policía Federal que informara el número total de sus integrantes mediante oficio PF de la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal, informando que la Policía Federal cuenta con 37 mil 856 integrantes activos al 15 de noviembre del 2017.

Al no acreditarse los elementos necesarios para la clasificación de la información ni el daño correspondiente que causaría la divulgación de la misma, el agravio de la parte resultante se consideró fundado, por lo cual, el sentido que se propone, señores Comisionados y Comisionada, es modificar la respuesta a efecto de que el sujeto obligado entregue la información relacionada con el número de elementos incorporados a la Agencia en los términos y periodos solicitados.

El derecho de acceso a la información es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado con las excepciones y limitaciones que expresamente se tengan establecidas para tal efecto.

Este derecho en muchas ocasiones es ejercido por situaciones o temas de actualidad que se están presentando o aquejan al país y es aquí en donde en plena época de campañas para obtener cargos públicos, el derecho de acceso a la información se vuelve fundamental en la vida democrática del país, pues es una herramienta que tienen los ciudadanos para conocer información oficial que les permita decidir su voto de manera informada.

Lo anterior es relevante en tanto que durante todo el tiempo que se lleva a cabo los procesos electorales, puede ocurrir que se difundan en medios de comunicación y redes sociales e incluso por parte de los diversos candidatos, información que no es obtenida directamente de la institución vinculada con la información, ni con algún órgano encargado de llevar la estadística correspondiente, lo que ocasiona en muchas ocasiones desinformación a las personas y a los posibles votantes.

En el presente caso la información a la cual se pretende acceder, está relacionada con el número de elementos que se han incorporado a la Agencia de Investigación Criminal en un determinado periodo, dicha Agencia constituye un órgano desconcentrado de la PGR que tiene por objeto la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de excepciones para combatir tácitamente el fenómeno delictivo a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos, para lo cual contará dentro de su estructura con la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis, Información para el Combate a la Delincuencia.

En ese sentido, a efecto de que la ciudadanía tenga certeza de los datos que son circulados en el marco del presente periodo electoral y que versan sobre diversos rubros, entre ellos, el combate a la delincuencia que es uno de los más mencionados, que se realiza a través de los cuerpos policiacos destinados a la procuración de justicia y prevención del delito, se estima que se debe de informar el número de elementos que han engrosado la fila de la Agencia, lo que permitirá advertir la eficacia con la cual se está llevando a cabo la función sustantiva y la protección de los intereses que se les han encomendado, más si se contempla que con el dato que ya proporcionó el propio sujeto obligado sobre el número de elementos que fallecieron del 2006 al 2017 y como se dijo y lo contestó, fueron de 148 elementos fallecidos en actos de servicio.

Así, toda vez que por parte de la ponencia no fue posible advertir la actualización de la causal invocada por el sujeto obligado, ni el daño que se causaría por la divulgación de la misma, propongo que se le ordene al sujeto obligado, modificando su respuesta, que proporcione el número de elementos incorporados a la Agencia del 2016 al 2017, desglosados por sexo, grado y rango.

Es cuanto.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Desde luego que, como todos los asuntos con merecimiento similar, digo, finalmente, hemos dicho y

aprovecho, digo, quizá hoy iniciamos la verificación vinculante, sería bueno pudieras, tú que has llevado sobre todo las..., ah, bueno, fantástico, están haciendo tiempo, tú lo mencionas, sí para quienes nos siguen en vivo y para quienes lo hacen también vía Plataforma Nacional Digital.

Secretario, puede recabar la votación de este asunto expuesto por el Comisionado Guerra Ford.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con gusto, Comisionado Presidente.

Se somete a su consideración, señora y señores Comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 1232/2018 que propone modificar la respuesta de la Agencia de Investigación Criminal.

Le pido al Comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: Evidentemente a favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor también.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 1232/2018, en el sentido de modificar la respuesta de la Agencia de Investigación Criminal.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Secretario.

Pues ahora, de nueva cuenta, le tocará al Comisionado Óscar Guerra presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 1587/2018, interpuesto en contra de la Nacional Financiera S.N.C., Sociedad Nacional de Crédito, que somete a consideración de los integrantes del Pleno.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: Gracias nuevamente. Bueno, la solicitud fue con relación al fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, local que todo mundo conoce, conocemos y que muchas veces algunos hemos asistido, que pidió lo siguiente:

Información relativa a la creación, administración, control y aprovechamiento del fideicomiso para este uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional.

Dos, los contratos marco-legal, disposiciones jurídicas aplicables por las cuales la empresa privada OCESA o, en su caso, Ticketmaster, maneja la venta de boletos del Auditorio Nacional.

Tres, el nombre de la fiduciaria, fideicomitente, fideicomisario del fideicomiso referido en el punto uno, o sea el Fideicomiso del Auditorio Nacional.

La respuesta de Nacional Financiera fue a través de la Dirección Fiduciaria, comunicó al particular sea el área administrativa que participa con el carácter de fiduciaria del Contrato del Fideicomiso Privado, denominado "Fideicomiso para uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional" e indicó que el resto de las partes que participan en el contrato del fideicomiso que tiene el número 11095, son el fideicomitente Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya naturaleza jurídica es de una empresa de participación estatal mayoritaria de la Ciudad de México, y los fideicomisarios son el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es un órgano descentralizado, la Administración Pública Federal y el Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México, que es una entidad federativa.

Respecto a los contratos el marco legal, las disposiciones jurídicas aplicables por la cual la persona moral de nombre OCESA o, en su caso, Ticketmaster maneja la venta de boletos del Auditorio Nacional y todos y cada uno de los contratos o convenios que la persona moral referida OCESA o Ticketmaster tengan celebrado con el Auditorio Nacional para permitir la venta de boletos en el referido recinto, se indicó que no fue posible localizar estos documentos o alguno similar que contenga información requerida, debido a que el fideicomiso en cuestión cuenta con una administración delegada, misma que se ejerce a través del Coordinador Ejecutivo del Fideicomiso, y que este último, es quien se encuentra facultado para celebrar los contratos de prestación de servicios referidos, por lo que no cuenta con obligación alguna para contar con dicha información.

Asimismo, respecto a la información relativa a la creación, administración, control y aprovechamiento del Fideicomiso, la Dirección Fiduciaria comunicó al particular que llevó a cabo una búsqueda en sus sistemas, registros, archivos de trámite y concentración, arrojándole como resultado la localización de un contrato de fideicomiso de fecha 16 de mayo de 1991 y dos convenios modificatorios del mismo, de fecha del 18 de diciembre de 1995, y del 26 de diciembre del 2001, respectivamente, los cuales podría desprenderse tal información.

Sin embargo, señaló que dichos documentos tienen el carácter de información confidencial, pues el Fideicomiso es privado, y por lo tanto no involucra el ejercicio de recursos públicos, con fundamento en el artículo 103, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

El particular impugnó la negativa a la información solicitada, bajo el argumento de que reviste el carácter privado, toda vez que el fideicomiso es de la empresa Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, SERVIMET, y el Fideicomiso es el Instituto Nacional del fideicomisario es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBA, se debe considerar que el fideicomiso 11095 es público, y por tanto, se debe conceder el acceso a la información.

Las consideraciones del proyecto son las siguientes:

Primero, en la resolución se precisa que el recurrente no expresó alguna inconformidad con la obtención brindada por el sujeto obligado al contenido número tres, por lo cual lo consintió de manera tácita, que es el nombre de la Fiduciaria, fideicomitente, fideicomisario, fideicomiso referido.

Finalmente hubo parte de información que se le dio diciéndole que es SERVIMET, Servicios Metropolitanos, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, y que es el Departamento del Gobierno del Distrito Federal.

Por otra parte, respecto al contenido uno, se analizó la clasificación invocada por el sujeto obligado, relativo al secreto fiduciario que fue el que citó.

En ese sentido, se determinó que tal clasificación no fue correcta, pues el artículo 114, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que es el que cita, señala que los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitantes, fideicomisarios o fiduciarios, en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de estos.

Por tanto, se exceptúa la obligación de mantener la información confidencial, cuando confluyan los siguientes elementos: el sujeto obligado se constituya como usuario o institución bancaria, o dos, que es el caso, se trata de operaciones que involucren recursos públicos.

De tal manera, al estudiar las normas aplicables y documentación puesta a disposición de este Instituto, los contratos de este Fideicomiso por parte del sujeto

obligado, se advirtió la existencia de recursos públicos derivados de la aportación inicial, que realizó Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, SERVIMET, para la constitución del Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional en su carácter de fideicomitante, pues el capital mayoritario de la empresa de Servicios Metropolitanos en cuestión, fue aportada por el entonces Departamento del Distrito Federal, actualmente Gobierno de la Ciudad de México, quien es titular de más del 50 por ciento del capital social de dicha empresa. Es decir, la empresa que realizó la aportación inicial para la constitución del Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional es una paraestatal de capital mayoritario público de la Ciudad de México. Y entonces, existen, evidentemente recursos públicos involucrados.

Por otro lado, en relación con el segundo requerimiento del particular, consistentes en conocer los contratos, marco legal, disposiciones jurídicas aplicables por las cuales la persona moral OCESA o su caso, Ticket Master, manejan la venta de boletaje en el Auditorio Nacional y los contratos o convenios celebrados entre estas empresas morales y el Auditorio Nacional para permitir la venta de boletos en el referido recinto, se advirtió que si bien el sujeto obligado gestionó la solicitud ante una unidad competente, lo cierto es que omitió dirigir la misma consulta en cuestión, a la Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria, quien se encarga de definir y dirigir los procesos jurídicos y las operaciones fiduciarias con el objeto de organizar que todas las operaciones de Nacional Financiera se apeguen a los marcos jurídicos y lineamientos vigentes, por lo que debe turnarse dicha solicitud, a fin de que esta emita un pronunciamiento.

Así, el sentido que les propongo, Comisionada y Comisionados, es modificar la respuesta de Nacional Financiera e instruirle a efecto que entregue al recurrente el contrato del Fideicomiso del 16 de mayo de 1991, que ya nos dijo que sí tiene, evidentemente ese no es el problema, el problema es su carácter, y sus dos Convenios Modificatorios que también él mismo nos señaló, el de 18 de diciembre de 1995 y el del 26 de diciembre de 2001, en versión pública, realizando también, y también realizar una búsqueda exhaustiva, como ya se dijo, en la Dirección General de Jurídica y Fiduciaria de los contratos o marco legal y disposiciones jurídicas, y por disposiciones jurídicas aplicables a las cuales la persona moral OCESA o en su caso Ticket Master manejan la venta de boletos del Auditorio Nacional y/o los contratos o convenios celebrados entre estas empresas y el Auditorio Nacional que le permiten la venta de boletos al referido recinto, informando al particular del resultado de dicha búsqueda.

Considero oportuno presentar este asunto en lo individual con el fin de destacar la importancia de dar a conocer información que involucra el ejercicio de recursos públicos para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional al tratarse de un inmueble recinto del Estado Mexicano.

Así, resulta importante destacar que el 16 de mayo de 1991, Servicios Metropolitanos como único fideicomitante constituyó el Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, designándose como fiduciaria a BANCA

CREMI, en ese momento, y como fideicomisarios al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Departamento del Distrito Federal, actualmente Gobierno de la Ciudad de México, y a Servicios Metropolitanos, siendo ésta, como ya se dijo en última, es una empresa de participación estatal.

Por otro lado, se tiene que el patrimonio del Fideicomiso se integró, entre otros conceptos por una aportación de mil millones de pesos viejos, sí, estamos hablando así, que Servicios Metropolitanos entregó a la fiduciaria, a su vez el Instituto Nacional de Bellas Artes entregó a la fiduciaria el Auditorio Nacional sin cargo de gravamen de tipo fiscal, laboral, administrativo o de cualquier índole; asimismo, la fiduciaria entregaría anualmente al Instituto Nacional de Bellas Artes la cantidad de cuatro mil 500 millones de pesos viejos, el cual se iría incrementando de acuerdo con el índice inflacionario —todo esto lo marca el contrato— anual que el Banco de México determinara al concluir cada ejercicio fiscal.

En tal sentido, al fungir Servicios Metropolitanos como una empresa de participación estatal mayoritaria y ser la accionista mayoritaria y única, siendo el Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, nos arroja que el Gobierno de la Ciudad de México posee acciones que superan el 50 por ciento del capital social de esta empresa y por ende, están claramente involucrados cuantiosos recursos públicos en la operación de ese fideicomiso.

Igualmente en la concesión del fideicomiso para el uso y aprovechamiento del auditorio se encuentra involucrados recursos derivados de la aportación que realizó el Instituto Nacional de Bellas Artes, ya que dicho instituto en su carácter de fideicomisaria, entregó a Nacional Financiera en su calidad de fiduciaria el inmueble denominado Auditorio Nacional, construido inicialmente por el Departamento del Distrito Federal, actualmente Gobierno de la Ciudad de México, en terrenos que destinó el Gobierno Federal para tal efecto, siendo que la Secretaría de Educación Pública concluyó las construcciones respectivas de tal recinto.

Por todo lo anterior, es evidente que los documentos requeridos tienen naturaleza pública contrario a lo señalado por el sujeto obligado, al indicar que la documentación hablaba de un fideicomiso de carácter privado, lo cual, desde nuestro punto de vista no es sostenible en términos de la ley y de los datos aquí mencionados.

En ese sentido permite cumplir con los dos de los objetivos que fijan nuestra ley en esta materia, específicamente en las fracciones II y III de su artículo 2 donde determina que dicha legislación permitirá transparentar la gestión pública mediante la difusión, información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral y a su vez, favorece la rendición de cuentas de los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño.

Y otra gran aportación, digamos, que tiene esta Ley General y que está evidentemente en la Ley Federal pueda ser clara, explícitamente a los fideicomisos,

a los fondos públicos, sujetos obligados directos de la ley, siempre y cuando evidentemente estén recursos públicos involucrados como es el caso.

Por otra parte, resulta relevante precisar que el sujeto obligado, perdón, antes de pasar a esto, también permito invitarlos el 8 de mayo, la próxima semana a las 10 de la mañana, se presenta un libro de FUNDAR, sobre los fideicomisos y fondos públicos en materia de transparencia, que me voy a permitir estar comentando, que está obviamente muy relacionado la importancia no sólo en número, que son más de 300, sino del número de recursos que manejan éstos y la importancia de transparentar los mismos, es el 8 de mayo, no recuerdo bien en qué auditorio pero FUNDAR lo está organizando.

Por otra parte, resulta relevante precisar que el sujeto obligado manifestó en su respuesta que no cuenta con los documentos que den cuenta del permiso de la venta de boletos, como ya se dijo, esto tendrá que ser avalado o después de una búsqueda también la Dirección General Jurídica.

Simplemente creemos que es importante ver la posibilidad también de transparentar estos contratos que se hacen con estas dos empresas o con alguna de ellas para la venta de boletos, dado que evidentemente, viendo el carácter que tiene este fideicomiso de carácter público, y los ingresos que se puedan generar por la venta de boletos, pues se vuelve un dato relevante si podemos tener en cuenta, en consideración que en el año 2017 la revista PopStar, que se dirige a promotores de la industria al espectáculo mundial, ubicó al Auditorio Nacional como el lugar número 1 en la venta de boletos en el mundo, eso se puede verificar, con una venta de un millón 400 mil 180 localidades en el 2017, por lo cual los términos de los contratos o convenios que se realizan con estas dos empresas o con alguna de ellas, Ticketmaster, OCESA para la venta-distribución de los boletos, pues también se vuelve un dato relevante de un auditorio que puede tener una administración privada, pero que evidentemente se constituye y están involucrados recursos públicos, y quisiéramos saber evidentemente qué utilidad tiene esto para las aportaciones que ha hecho el sector público en sus diferentes modalidades, tanto del Gobierno de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otros, y finalmente para el Gobierno Mexicano y Nacional Financiera en su calidad de administrador de este fideicomiso, pues debe y debiese contar con esta información.

Sería todo señores Comisionados.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias al Comisionado Óscar Guerra, que ha dado cuenta de este otro asunto, y es que efectivamente todos los que se escogen tienen referencias que nos ayudan a entender mejor la operación del estado, que es de lo que se trata, porque finalmente ese es el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Así es que estas sesiones ayudan a ilustrar y a ilustrarnos todos, a aprender juntos sobre el ejercicio de estos derechos.

Vamos a solicitar al Secretario que recabe la votación para este asunto que ha expuesto el Comisionado Guerra Ford.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con mucho gusto, Comisionado Presidente.

Se somete a su consideración, señora y señores Comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 1587/2018, que propone modificar la respuesta de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito.

Le pido al Comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Gracias.

Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor del proyecto.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor también, desde luego.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 1587/2018, en el sentido de modificar la respuesta de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Secretario.

Ahora, le solicito que usted mismo nos presente una síntesis del otro asunto mío, que éste es el 1771/18, interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República, para facilitar la exposición.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

Mediante una solicitud de información, una particular requirió a la Procuraduría General de la República, diversa información desagregada, relacionada con números, bajas, muertes y remociones y currículum vitae, de policías judiciales federales y sus distintas denominaciones hasta llegar a las policías federales ministeriales y agentes del ministerio público federal, de noviembre de 1996 a diciembre de 2017.

En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó diversa información relacionada con lo solicitado, clasificó como información confidencial diversos datos contenidos en los currículum vitae solicitados, con fundamento en la fracción I del artículo 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y clasificó como información reservada el número de elementos con fundamento en las fracciones I y IV del artículo 110, del mismo ordenamiento legal.

Inconforme con lo anterior, la particular interpuso recurso de revisión, manifestando como agravio que la información proporcionada se encontraba incompleta.

Asimismo, impugnó la clasificación aludida por el sujeto obligado.

Al respecto, el Comisionado Presidente Acuña propone sobreseer parcialmente el recurso planteado y modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruye realice una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades competentes de entre las cuales no podrá omitir la oficialía mayor a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización y a la Dirección General de Servicio de Carrera, y entrega a la recurrente el resultado de la búsqueda en número de bajas por remoción por faltas disciplinarias de policías judiciales federales, y sus distintas denominaciones hasta llegar a las policías federales ministeriales, de noviembre de 1996 a 2003, así como de 2012 a 2014, desglosado por año, del número de agentes del Ministerio Público Federal, que causaron baja por muerte en cumplimiento de su deber, de 1996 a diciembre de 2017, desglosado por año, del número de agentes del Ministerio Público Federal que causaron baja por baja disciplinaria o remoción de 1996 a 2011, desglosado por año.

Asimismo, instruye el sujeto obligado entregar a la recurrente el número total de elementos que conforman la policía federal ministerial de noviembre de 1996 a diciembre de 2017, desglosado por año, y el número de agentes del ministerio público federal del año 2017.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias.

En efecto, como se puede ver, como se puede conocer, se solicita una información que es básicamente estadística y que tiene que ver efectivamente con números de policías judiciales federales, y sus distintas denominaciones, hasta llegar a policías federales ministeriales, de noviembre del '96 a diciembre del 2017.

En algunos casos, y esto ha sido una cuestión que se ha discutido ampliamente, se ha reconocido que por cuestión de estrategia de seguridad, no se puede dar a veces el número de los mismos, cuando se ubican en un contexto que pueden ser por esa vía de interpretación vulnerables en la operación que le sea asignada.

Pero la información estadística en principio, es siempre un asunto que no se puede negar, no se puede, vamos a decir, reservar, y normalmente el criterio es siempre a máxima y es siempre a todo lo que se pueda, cuando a veces hay excepciones, sí se distingue.

A veces yo recuerdo una discusión muy interesante que tuvimos una vez, sobre un tema de número de efectivos cuando preguntábamos a una corporación que nos dijera por qué no entregaba el número completo, habida cuenta que, sabemos que en toda corporación hay una serie de labores que son administrativas, estrictamente.

Y recuerdo que nos decían: “Sí, lo que pasa es que todo el personal que es adscrito a esta dependencia –que era una dependencia policiaca-, tiene condición de policía y en cualquier momento, por una emergencia que haya, así se encuentren de hacer labores de oficina, o labores de cocina o de mantenimiento de aeronaves, por decir algo, o de equipo, pueden eventualmente ir a batalla, digo a campo, pues, como se dice propiamente”.

Entonces, la discusión puede haber en el caso del número, pero la evolución de los nombres de la Policía, de los agentes, cómo ha venido cambiando, si se llaman de un modo y luego cambiaron a otro porque vino modificándose 21 años toda esta cuestión, digo, ha sabido queda que se puede y se debe dar.

Entonces, nosotros consideramos en esta ponencia que el número de servidores públicos sustantivos adscritos a la entonces PJF, que fue como fue tan conocida la PJ, no de buena referencia en el pasado, por aquella manera tan ruda y esos comandantes históricos tan identificables o tan identificados con ese viejo momento de la construcción policiaca, así como de la actual PFM, porque pasó a AFI y luego a PFM, la Procuraduría General de la República manifestó que se encontraba imposibilitada para proporcionar dicho dato estadístico, ya que con ello podría vulnerar la capacidad de reacción con la que se cuenta para combatir la delincuencia, lo anterior con fundamento en la fracción I del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otra parte, respecto al número de agentes del Ministerio Público de la Federación, la Procuraduría General de la República hizo del conocimiento de la hoy recurrente que la Oficialía Mayor y la SEIDO manifestaron que dicho datos es considerado como reservado, toda vez que la misma actualiza la reserva prevista en la fracción V de ese mismo artículo 110.

De la misma manera, la Procuraduría General de la República señaló que de acuerdo a las facultades específicas con las que cuentan los agentes del Ministerio Público adscritos a la SEIDO, se desprende que el total de dicho personal sustantivo, además de actualizar la clasificación de reserva prevista en la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia, también se actualiza por la I por dicho precepto legal.

La recurrente señaló con motivos de agravio, por una parte la clasificación de la información y por otro, que la información se encontraba incompleta en los términos siguientes: que no se le entregó la información de los servidores públicos removidos del 96 al 2003, ni de 2015 a 2017, que la Visitaduría General no entregó información de 96 a 2011, que impugna la clasificación del número de agentes del Ministerio Público, los alegatos, quiero decir que la Procuraduría General de la República mantuvo sus posiciones.

Voy a decir en poco que la PGR no se apegó a lo señalado en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública, toda vez que omitió realizar la búsqueda en la totalidad de las áreas competentes.

Respecto al número de servidores públicos sustantivos adscritos a la Policía Federal Ministerial, es de precisar que el proporcionar el número total de policías federales ministeriales de la PGR no implicaría menoscabar el estado de fuerza de dicha agrupación policiaca, debido a que no existe tarea o evento alguno que implique el despliegue conjunto de la totalidad de estos elementos para la contención de grupos delictivos.

Es decir, en México hay mil, por decir un número que no tiene nada que ver, no pone, pues sí, evidencia quizá una posición que respecto de otros países con el mismo número de población y con bitácoras de delictividad pueda haber comparativo, pero no pone en peligro a los mil, ni a cien, ni a diez, ni a veinte porque están repartidos en tareas y en situaciones diversas, de esta manera es de observar que la Policía Federal Ministerial se organiza de manera regional atendiendo a diversos ejes rectores; sin embargo, la información peticionada no fue requerida con algún tipo de desglose por región o por asignación específica, que es ahí donde podría haberse actualizado una reserva, decir: "Oiga, en la Región Centro-Norte, en la Región Sur, en la Región Sureste, en la Región Noreste, la que sea, pues ahí sí pone una cuestión de lógica, de operatividad y de logística propiamente, de movimiento de elementos.

Lo anterior, debido a que dicha información sólo refleja la cantidad del personal con que se cuenta por la Policía Federal Ministerial no implica dar a conocer algún

protocolo de actuación ni información que se haya generado en el ejercicio de las acciones de investigación o inteligencia que realice.

Derivado de todo lo anterior, es posible afirmar que el número total de elementos que conforman a la Policía Federal Ministerial de noviembre de 1996 a diciembre de 2017 desglosada por año, no se ajusta a ninguna de las hipótesis normativas del décimo séptimo de los lineamientos generales, por lo que tampoco vulnera la seguridad nacional manifestada por la Procuraduría General de la República tanto porque no es aplicable en la reserva hecha valer durante la sustanciación del procedimiento.

Ahora bien, por lo que respecta al número de agentes del Ministerio Público Federal en el año 2017, la PGR estableció que dicha información permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que por razones a su cargo desempeñan funciones estrechamente relacionadas con las facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitir intentar contra su vida, seguridad o salud.

Sin embargo, para que la causal de reserva en estudio se actualice, resulta necesaria la existencia de un vínculo entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

De esta manera, el proporcionar el número de agentes del Ministerio Público Federal del año 2017 no genera vínculo alguno, de manera que pueda reconocerse o identificarse a determinado agente del Ministerio Público, por lo que de ninguna manera podría ponerse en riesgo su vida, seguridad o salud.

Cuando por ejemplo en alguna población o demarcación sólo se encuentra a uno o dos, pues es evidente que una ecuación de este tipo podría arrojar a veces una condición de vulnerabilidad, no en este caso.

Es decir, la información del interés del ahora recurrente representa una cantidad sin especificar o señalar a algún agente del Ministerio Público, por lo que es inexistente el vínculo con persona física alguna.

Por tanto, en el caso concreto no se actualiza la causal de reserva invocada por la Procuraduría General de la República, establecido en la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la misma manera que el proporcionar el número de agentes del Ministerio Público Federal del año 2017.

Y con eso he reiterado que no encuentro yo razón alguna para dar valor a estas objeciones o a estas posiciones que hizo concretamente la Procuraduría General de la República.

Y yo les pido a mis compañeros que me permitan modificar la respuesta, ¿por qué no revocar? Porque sí se proporcionaron algunos elementos, si hubiese sido

rotunda la negativa tendríamos que revocar, pero en este caso habrá que reconocer que en cuanto haya, por mínimo que sea, un elemento que se dio como respuesta, ya no cabe revocar; no se puede dejar sin valor todo aquello cuando algo sí pudo ser atinente a lo pedido, a lo requerido.

Entonces solicito a los compañeros me apoyen, me respalden para modificar la respuesta e instruirle que realice una búsqueda como debe de ser, en la que en todas sus unidades competentes, entre las que no se podrá omitir la Oficialía Mayor, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización y la Dirección General del Servicio de Carrera, y entregar al hoy recurrente el resultado de dicha búsqueda con el número de bajas, por remoción, por faltas disciplinarias de policías judiciales, federales, y sus distintas denominaciones, hasta llegar a policías federales ministeriales, de noviembre de 1996 al 2003, así como del 2012 al 2014, que estamos hablando de 20 años, hasta el 2017 son 21 años de modificaciones en la vida de la evolución policiaca de la Procuraduría General de la República.

Así es que el número de agentes del Ministerio Público Federal que causaron baja por muerte en cumplimiento de su deber, estamos hablando de números, cifras, estadísticas, no los nombres, el número de agentes del ministerio público federal que causaron baja por baja disciplinaria o remoción de 1996 al 2011, desglosado por año, y que se entregue a la hoy recurrente el número total de elementos que conforman a la Policía Federal Ministerial de noviembre de 1996 a 2017, desglosado por año, entregar a la hoy recurrente el número de agentes del ministerio público federal del 2017; es decir, prácticamente respaldar todos los agravios que la recurrente al haber tropezado con esa barrera informacional o informativa de la Procuraduría General de la República, no pudo satisfacer.

Esa es mi propuesta.

Compañera, compañeros Comisionados solicito su generosa intervención.

Compañero Comisionado Guerra Ford.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: Muchas gracias. Bueno, de acuerdo totalmente con el proyecto, simplemente aquí tenemos dos proyectos que preguntan cosas similares, en los dos casos igual, tiene en un lado la reserva y en el otro lado la entrega.

Voy a poner el ejemplo. En el que acabo de exponer hace rato lo que pidieron es cuál es el número de elementos que se han ido incorporando a la Policía Ministerial del 2006 al 2017, y aquí nos dicen: "No, no te los puedo dar, porque se pone en riesgo el estado de fuerza, etcétera".

No tienes el estado de fuerza realmente, porque no está planteando ni dónde están, ni qué hacen, etcétera, y sobre todo no el total, porque son los que van a incorporando.

Aquí le preguntan cuántos han caído en función, haciendo sus labores en ese sentido, de un período a otro

Acá se lo preguntan a la Agencia de Investigación Criminal, que depende de la PGR, pero es un sujeto obligado específico, que es un descentralizado de la PGR, un desconcentrado de la Procuraduría.

Y acá le preguntan a la Procuraduría esto mismo y otras cosas. La solicitud, no quiero ni entrar al recurrente, es un día una y otro día otra. El recurso es un día y el otro día otro.

Coincidencias que ha de tener, alguien está trabajando este tema tan interesante, que tiene que ver, digamos, con los resultados que puede haber en procuración y disminución de la delincuencia.

Es cierto que en la primera respuesta de la PGR, porque a él le preguntan más cosas, pero dentro de lo que le pregunta, dice que llegue hasta llegar a los policías federales ministeriales.

Y le dicen cuántos tiene, ahí sí cuántos tiene y en un período más largo.

En la primera respuesta no se lo dan, se lo reservan, cuando mete el recurso se lo da.

Y por ejemplo nos dice que los agente del Ministerio de la Federación, en 1996 eran 1 mil 164; hoy en el 2016, son 2 mil 331.

Es cierto que acá pidieron hasta el 2017, acá también, pero le dan hasta el 2016.

Pero dan año por año, con una simple división, pues en cuántos se han incorporado. Si en el 2013 había 2 mil 265 y en el 2012 había 2 mil 956, aparte tengo las bajas por año, aritmética simple, digamos, la niega y luego aquí la dan y lo peor es que aquí dan, no lo peor, lo mejor es que aquí dan el total y acá nos niegan que no pueden dar el estado de fuerza, porque se dicen los que se van a incorporando, alguien podría deducir el total, cuando aquí está entregado el total.

Luego, lo que sí se entrega en las dos, aquí se entrega desde el principio, es el número de bajas que acá se habla de 148 elementos fallecidos, pero es cierto, hay que decir, que es de un período menor del 2016 al 2017.

En una de las respuestas adicionales nos dice la Procuraduría que hay 196 que han sido baja por muerte en cumplimiento de su deber, pero es del 2001 al 2017, y hay cinco años de diferencia ahí.

Pero lo que es importante, es que aparte nos anexa un cuadro de las defunciones de agentes del Ministerio de Público de la Federación año por año, entidad por entidad federativa, en ese sentido.

Creo que este asunto de la congruencia, consistencia de la información, es elemental. Creo que hay consistencia, por ejemplo, en el número de bajas, pero hay un trato diferente, sé que no son el mismo sujeto obligado, pero es un desconcentrado, pero hay un trato diferente a una misma información.

En un caso que son las incorporaciones se reserva, porque puede dar el estado de fuerza; en otros casos es cierto que se reserva al inicio, cuando se va al recurso, se entrega la información del total de policía ministerial que hay, con lo cual, se está entregando, que yo estoy de acuerdo que es público, porque ni sé dónde está, ni qué hacen, aparte las funciones de la Policía Ministerial no son de contacto directo, son de investigación, pero también pueden decir cuánta gente está investigando y depende de los ministerios públicos lo que le ordenen, les digan, etcétera.

Se da el total, por lo cual se puede evidentemente deducir las incorporaciones.

Creo que este tipo de cuestiones, ahí es donde hay que, digamos, lo bueno es que los dos recursos resuelven de forma consistente, pensando lo que es público.

Sabemos que hay información que sí puede ser reservada en este caso, obviamente los nombres, los domicilios, dónde están, sus funciones, sus actividades, una serie de cuestiones que sí podrían poner en riesgo las labores que realizan los diversos cuerpos que operan y trabajan para la Procuraduría o para, en este caso, la Agencia de Investigación.

Pero simplemente para detonar ahí cómo ante una misma solicitud hay dos tratamientos diferenciados de dos Agencias o de dos (...) que deberían estar interconectados, digamos, en el tipo de información que manejan y que ahora, ojalá siempre, pues está siendo muy evaluada en términos de lo que es el combate a la delincuencia en este país.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Esa es la circunstancia y pues como lo hemos dicho, no vale para algunos, se hace la referencia, se cree que los comportamientos constitucionales se modifican en el tiempo, en la medida que la legislación se perfecciona y se mejora, y no es así. Algunas instituciones que son las primeras que en el tiempo tuvieron el rigor de responsabilizarse con el derecho de acceso a la información pública, me refiero concretamente a las que integran el Ejecutivo Federal en su conjunto, por supuesto que desde el 2003, justo cumplimos en este año 15 años del vigor, la vigencia de la Ley Federal de Transparencia, aquella ley originaria, pues sí, el Ejecutivo Federal fue durante algún tiempo el Poder más regulado, más supervisado y más incentivado a cumplir con estándares de objetividad en esta materia.

Los sujetos obligados han recibido una carga de energía pública de capacitación, de adiestramiento en esto, pero con el tiempo también puede pasar que haya involuciones o que vengan ciclos o contraolas, se puede decir, y aquí en este caso yo puedo reconocer que sí, es lamentable que habiendo, ha habido mejores

momentos en el responder de algunas instituciones, se regrese a una lógica de mucha resistencia a reconocer lo que son datos o elementos que se consideraban como ya asimilados, como que no se puede más que dar como debe de ser.

Pero bueno, yo dejo aquí mi punto, desde luego espero que mis compañeros me acompañen en el proyecto de revocar a la PGR, ya dije, datos que son eminentemente estadísticos, modificar, perdón, modificar y ya, Óscar Guerra siempre con las aritméticas a la mano, dio una buena exposición de por qué en estos casos hay contradicciones que luego son, pues todavía más difíciles de asimilar.

Muchas gracias, compañeras, compañeros, ¿no gusta alguno de ustedes decir algo?

Pues bueno, Secretario, si es tan amable recabe la votación, por favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

Se somete a su consideración, señoras y señores Comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 1771/2018, que propone modificar la respuesta de la Procuraduría General de la República.

Le pido al Comisionado Guerra, manifieste por favor el sentido de su voto.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Es mi proyecto.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdoba Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 1771/2018 en el sentido de modificar la respuesta de la Procuraduría General de la República.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias. Le vamos a solicitar ahora al Comisionado Joel Salas Suárez que, por favor, presente el proyecto de resolución RRA 1905/2018 interpuesto en contra del Instituto Nacional del Emprendedor.

Comisionado Joel Salas Suárez: Nada más como lo comenté me gustaría, si no tiene inconveniente el Pleno, poder presentar los dos asuntos al mismo tiempo, dado que estamos hablando de un mismo sujeto obligado y creo que la información de una manera u otra se relaciona o se interrelaciona a partir de una misma problemática.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Por supuesto y como hemos hecho en otras ocasiones, si no tienen inconveniente, eso sí, siempre la votación al final, aunque sea idéntica la exposición sí se hace por separado para cumplir con el ejercicio.

Comisionado Joel Salas Suárez: Como lo comentaba, en esta ocasión posicionaré dos recursos de revisión relacionados con el Instituto Nacional del Emprendedor, vale la pena hacer este ejercicio ya que a pesar de que responden a solicitudes de información distintas, los recursos versan sobre el tema y su análisis consideramos es similar.

Dos particulares solicitaron, al mejor conocido como INADEM, copia de los comprobantes fiscales de los recursos ejercidos en dos proyectos específicos en la entidad federativa de Tabasco.

En el RRA 1905 la solicitud fue sobre los comprobantes del proyecto Integración del inventario de trámites para el establecimiento de un registro de trámites y servicios, esto en el periodo de 2014, mientras que en el RRA 1935 la solicitud se refirió a los comprobantes del proyecto Generación de nuevas líneas de negocio para la industria pesquera para el periodo 2016.

En respuesta el sujeto obligado indicó que dicha documentación estaba en proceso de revisión, por lo que sólo podía entregarle después de analizar la aplicación de los recursos y comprobar las metas y los entregables del proyecto.

Inconformes, en los dos casos, los particulares manifestaron como agravio, que les fue negada la información solicitada, en alegatos, el sujeto obligado modificó sus respuestas iniciales.

Respecto al RRA 1905 localizó tres comprobantes fiscales y para el RRA 1935 localizó seis, en ambos recursos el INADEM señaló que dichos comprobantes aún no han sido validados por el Comité de Seguimiento del Fondo Nacional Emprendedor, agregó que las facturas contienen información confidencial de personas morales que no se recibieron recursos del sujeto obligado, por tal motivo, remitió al INAI una copia digitalizada en su versión pública.

Tras analizar ambos casos, esta ponencia concluye que los agravios planteados en ambos recursos resultan fundados, ya que las respuestas del sujeto obligado al señalar que los proyectos se encuentran en proceso de revisión, no están debidamente fundadas y motivadas.

Respecto a la clasificación de información confidencial, tras analizar las versiones íntegras y públicas de los comprobantes, esta ponencia determinó que sólo podrán ser testados los datos personales.

Conviene exponer públicamente estos recursos porque la información a la que se refieren trata sobre programas destinados a impulsar la economía en la entidad federativa de Tabasco, la cual enfrenta una crisis preocupante.

Tabasco es una de las primeras entidades federativas productoras del petróleo en nuestro país, desde que se descubrieron grandes yacimientos las actividades económicas se han concentrado en la extracción de hidrocarburos y actualmente su economía es dependiente de este recurso.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2016 el 54.1 por ciento del PIB Estatal provenía de la Minería Petrolera.

Por esta razón la caída internacional de los precios del petróleo y la disminución en la producción nacional han tenido un impacto negativo en la economía de esta entidad federativa.

A partir del año 2015 la entidad comenzó a registrar una tasa de crecimiento negativa, en el cuarto trimestre de 2017 fue de menos 7.4 por ciento, la peor del país después de Campeche, otro Estado, que depende fundamentalmente del recurso petrolero.

Esto agrava las condiciones de vida de los tabasqueños y dificulta resolver problemas graves en el estado, como lo es la pobreza.

En 2016 50.9 por ciento de la población de Tabasco se encontraba en esta situación, de acuerdo con datos del CONEVAL.

Ante este contexto, el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal articularon estrategias con el objetivo de incentivar la actividad económica de la región y apoyar a las familias y a las empresas.

En el año 2016 el INADEM anunció el programa de reactivación económica y desarrollo productivo para Tabasco y Campeche, con la meta de transferir recursos federales para superar la crisis económica, producto de la caída internacional de los precios del petróleo que enfrenta esta región del Sur de nuestro país.

Los proyectos a los que cuales se refieren los presentes recursos de revisión justamente forman parte de los varios esfuerzos que se implementan con fondos distribuidos a través del sujeto obligado.

El proyecto de integración del inventario de trámites para el establecimiento de un registro de trámites y servicios consiste en un catálogo que presenta información sobre los trámites y servicios que puede hacer el Gobierno para brindar certeza jurídica a los particulares y el proyecto "generación de nuevas líneas de negocio para la industria pesquera de Tabasco" tiene el objetivo de promover nuevos modelos para la industria pesquera en esta entidad federativa.

Además, el último forma parte de los cinco proyectos financiados con recursos del INADEM y del fideicomiso para el fomento y desarrollo de las empresas de Tabasco.

En el pasado el ejercicio de recursos del INADEM ha sido cuestionado ante posibles irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías del Fondo Nacional Emprendedor, las autoridades de Tabasco y Campeche no comprobaron el ejercicio de 30 millones de pesos en negocios afectados por la crisis petrolera entre 2014 y 2016.

Aunado a ello, la prensa local denunció que había opacidad en los proyectos financiados con recursos del FIDET y del INADEM, entre los que se encuentra el proyecto "Generación de nuevas líneas de negocio para la industria pesquera".

Ante la crisis económica los recursos federales transferidos a la entidad deben utilizarse responsablemente para impulsar el desarrollo. La diversificación de las actividades productivas y la generación de capacidades locales podrían ayudar a disminuir la dependencia de esta entidad federativa del petróleo, y así reactivar su economía.

Transparentar esta información brindara la oportunidad al INADEM de comprobar que estos proyectos contribuyeron a la economía del estado y dará certeza a la población de que los recursos federales transferidos a las entidades federativas son ejercidos adecuadamente.

Estos proyectos fueron parte del esfuerzo para estimular y diversificar la economía tabasqueña, y de esta manera, hacer que su población sea menos vulnerable.

Salir de la crisis económica le permitirá a la entidad federativa garantizar una vida más digna para sus habitantes y así reducir la pobreza.

Es por lo anterior que esta ponencia propone en ambos casos, revocar la respuesta del Instituto Nacional del Emprendedor e instruirle someter a consideración de su Comité de Transparencia, la versión pública de los comprobantes fiscales, proporcionados a los hoy recurrentes.

En dichos documentos, únicamente se deberán testar como datos personales, los establecidos en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia.

Una vez aprobados, el Instituto deberá remitir a los particulares, los comprobantes fiscales, y el acta del Comité que señale de manera fundada y motivada, las razones de dicha clasificación.

Es cuanto, compañeros de Pleno.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias al Comisionado Joel Salas Suárez, porque ha expuesto estos asuntos que ya se ha dicho, se han expuesto juntos, dos asuntos.

Y se votarán, eso sí, por separado, para dar cumplimiento al rigor del estricto orden cronológico.

Si es tan amable, Secretario, recabar votación.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

Se somete a su consideración, señoras y señores Comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 1905/18 que propone revocar la respuesta del Instituto Nacional del Emprendedor.

Le pido al Comisionado Guerra, manifieste por favor el sentido de su voto.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor, con un voto particular que ya es precedente, va a ser consecuente con otras resoluciones, por considerar que la información de personas físicas, deben clasificarse así por el artículo 13, pero la fracción III, y no por la fracción I como lo trae el proyecto.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor también.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad, con el voto particular del Comisionado Guerra, la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 1905/18, en el sentido de revocar la respuesta del Instituto Nacional del Emprendedor.

Ahora procedo a tomar la votación del RA 1935/18.

Se somete a su consideración, señora y señores Comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 1935/18 que propone revocar la respuesta del Instituto Nacional del Emprendedor.

Le pido al Comisionado Guerra, manifieste por favor el sentido de su voto.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor, con el mismo voto particular, en el mismo sentido que el anterior.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Gracias.

Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Sí, a favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor igualmente.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad, con el voto particular del Comisionado Guerra, la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 1935/18, en el sentido de revocar la respuesta del Instituto Nacional del Emprendedor.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Sí, gracias.

Vamos avanzando, de esta suerte han quedado resueltos los dos asuntos y vamos a pasar ahora, es así, ¿verdad? Pasamos ahora a la resolución de denuncia por incumplimiento.

Como tercer punto del Orden del Día, corresponde la votación del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia que presenta la Secretaría de Acceso a la Información. Solicito al Secretario, por favor, nos presente el proyecto de resolución, si no antes deseas, ¿prefieres que se exponga?

El Comisionado Guerra Ford.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: No, simplemente, bueno, voy a favor de este proyecto de cumplimiento en la ampliación de transparencia.

Cabe mencionar que estos incumplimientos se derivan de denuncias que los particulares hacen cuando revisan la información que tienen que publicar por ley los diversos sujetos obligados y, bueno, a partir de la denuncia la Secretaría de Acceso a través de las direcciones de Enlace hace el cotejo de denuncias fundadas o no, o si es parcialmente fundada y en base a eso se emiten los acuerdos como el que hoy vamos a aprobar.

Veo importante también decir que además de las denuncias que marca la propia ley, la propia ley también marca la obligación de los órganos garantes, en este caso, de nosotros y de los diversos órganos de llevar evaluaciones del cumplimiento de todos los sujetos obligados, de todas las fracciones, artículos y fracciones que la ley les marca, tanto de las obligaciones genéricas y específicas de la Ley General y en su momento también de la Ley Federal.

Y el día de hoy este Instituto ya ha aprobado el calendario y la metodología para la evaluación, ha iniciado la evaluación que ahora, a diferencia del año pasado, tal como lo ordena los Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia tiene un carácter vinculante, esto es, si hubiese incumplimiento por parte de los sujetos obligados de algún artículo o fracción o de alguna información que se tiene que publicar tanto en la plataforma con sus portales, se les avisará, tendrán un plazo para solventar la misma y después se hará un último llamado al titular de la dependencia y si el incumplimiento, esperamos que no sea el caso, persiste pues se tendrá que llegar a las medidas de apremio que la propia ley dice.

Entonces, el día de hoy está iniciando esta evaluación que es un trabajo muy arduo de todas las direcciones de Enlace y de todas las Secretarías de Acceso para poder sacar en tiempo y en forma estas evaluaciones.

Estas evaluaciones, en su momento, cuando se finalicen serán públicas, no solamente la calificación sino sobre todo y lo más importante, la ficha técnica de evaluación que obviamente es la solventación metodológica y comprobación de lo que se evaluó y cómo se evaluó porque evidentemente también los sujetos obligados en algún momento podrán cotejar estas evaluaciones con lo que ellos tienen publicado.

Sería todo y simplemente que el Instituto, como lo están haciendo los demás órganos garantes en cumplimiento de la ley está haciendo este proceso de evaluación, evidentemente las denuncias continúan cuando así los particulares lo consideren.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Cabe hacer sentir que esta manifestación de la potestad supervisora vigilante del INAI se potencia y de esta suerte la carga del impacto de su función o su funcionamiento como órgano garante se manifiesta con este perfil de organismo que indaga, supervisa, revisa periódicamente y califica indudablemente, califica el cumplimiento o el incumplimiento y además procede a darle consecuencia a esta insatisfacción que se pudiera ver, yo creo que indudablemente el impacto más severo que puede tener el incumplimiento detectado es que sea conocido, porque el ambiente público, bueno, la atmósfera no sólo de un contexto electoral que también lo facilita, el ambiente público pues generará seguramente el dividendo para los medios de comunicación que muchos de ellos han hecho gran camino en este ejercicio de exigencia pública, pues de evidenciar lo que no tiene justificación.

Algunos seguramente, de los sujetos obligados, enmendarán lo que no hayan colocado en tiempo y forma de su información, pero no dejará de ser esto una manifestación de un incumplimiento que no tiene lugar en el ejercicio eficaz de una administración pública y de lo público.

Continuemos, entonces, recabando la votación, solicitándole al Secretario nos haga el favor de recabar la votación de este asunto.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Se pone a su consideración, señora y señores Comisionados, el proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, presentada por la Secretaría de Acceso a la Información, identificada con la clave DIT 0041/2018, interpuesta en contra del Centro de Evaluación y Control de Confianza, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionado Guerra.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor, también.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad de la y los Comisionados la resolución mencionada.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias. Secretario.

Pues hemos arribado al punto de los acuerdos, sea tan amable, conforme al cuarto punto de dar vista o dar conocimiento, hacer conocimiento, recordar de qué asunto se trata para poderlo aprobar.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Sí, Comisionado Presidente.

Previo a empezar con la sección de acuerdos, quisiera hacer del conocimiento del Pleno que la Secretaría Técnica recibió el memorándum INAI/DGAJ/749/2018, en el que hace relación a lo ordenado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa respecto del recurso de revisión RDA 2669/2016, con término de tres días, y a ese efecto quisiera proponer a ustedes, poner a su consideración la integración de un punto en el Orden del Día, con el punto 7, que versaría más o menos en estos términos:

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se pone a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto

acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Sexto Tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, el amparo en revisión RA 0489/2017, misma que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1868/2016, dejar sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 2669/2016, de fecha 24 de agosto de 2016.

Si ustedes están de acuerdo se incluiría este punto y se recorrería al punto 8.

Si gustan que lo someta a votación.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: ¿Así se vota?

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: ¿De manera unánime? Bien.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Así es.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con el consentimiento unánime se integra este punto del Orden del Día.

Bien, entonces ahora sí con el punto 4 del Orden del Día.

Por instrucciones del Comisionado Presidente, me permito someter a su consideración, señora y señores Comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza la participación de un Comisionado en el Sexto Congreso Internacional de Protección de Datos Personales a celebrarse del 7 al 8 de junio de 2018 en Santa Martha, Colombia, identificado con la clave ACT-PUB/02/05/2018.04, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionado Guerra.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor también.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Se aprueba por unanimidad de la y los comisionados el acuerdo mencionado.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias, Secretario.

Vamos a continuar ahora con el otro acuerdo, que es el que se refiere al quinto punto del Orden del Día, dar cuenta, por favor, del asunto del que se trata.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

Se pone a consideración, señora y señores Comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza la participación de dos Comisionados en el Cuadragésimo Noveno Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico a celebrarse del 25 al 27 de junio del 2018 en la Ciudad de San Francisco, Estados Unidos de América, identificado con la clave ACT-PUB/02/05/2018.05, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionado Guerra.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor también.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad de la y los comisionados el acuerdo mencionado.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias, Secretario.

De nuevo, venimos ahora para acercarnos hacia el sexto punto, con otro acuerdo.

Así es que dar cuenta del mismo, por favor, Secretario.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venia, Comisionado Presidente.

El proyecto de acuerdo que se somete a su consideración, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a la Suprema Corte de Justicia para conocer en los términos que señale la Ley Reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución.

En ese sentido, la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados, otorga a este Instituto la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y estatal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal, y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales.

Al respecto, de la lectura de los artículos 15, 44, 47, párrafo primero; 49, párrafo segundo; 83, 91, 93, 95, 96, 98, 99, fracción IV, 103, 106, 107 y 108, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, se advierten posibles contradicciones a lo establecido en la General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados, en ese sentido con el orden constitucional.

Es por lo anterior que este instituto en su carácter de organismo garante de derecho a la protección de datos personales, al ser encargado de velar por la vigencia de este derecho humano, debe interponer los medios legales que se encuentran a su alcance cuando advierta que existe una posible contradicción entre una norma de carácter estatal y lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Por lo expuesto se pone a su consideración de los integrantes del Pleno, el acuerdo de referencia.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias, Secretario.

Entonces, procedamos, por favor.

Quiere hacer uso de la voz. Adelante, por favor.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: Yo sí.

Estoy a favor, porque coincido con parte o con una parte importante de la propuesta, de presentar la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 15, 21, 44, 47, 49, 93 y 95.

Desde mi punto de vista, también se sugiere se pudiera incorporar el artículo 21, debido a que la descripción de los elementos que deben ser considerados en el aviso de privacidad, se omite, además de la identificación de los datos sensibles, contenidos en el artículo 28, fracción II de la Ley General.

La mención del elemento previsto en el artículo 27, fracción III, que consiste en las transferencias de las que se requiere el consentimiento. Por lo cual considero que éste también se va a incorporar a la acción.

Pero también por mi parte, difiero de considerar contrarios a la Constitución y a la Ley General, los artículos 83, 91, 96, 98, 99, fracción IV; 103, 106, 107 y 108.

Sobre el artículo 83, de la admisión del plazo, se subsana éste, sin problema, aplicando la Ley General de manera supletoria conforme al transitorio segundo de la propia Ley General.

El del artículo 96, el plazo es menor para resolver el recurso, contrario a la Ley General, pues abona al principio de expedites, al establecer un plazo menor en 20 días hábiles, mientras que la Ley General, el famoso 40 y 20, la Ley Local fija un plazo de 30 más 10. O sea, al total son 60 días los que la Ley General establece para plazo máximo de resolver y 30 días.

Quiero decir que esto lo hemos hecho para muchas entidades federativas, que cuando el plazo es menor tanto en materia de acceso, como en materia de datos personales no los hemos declarado anticonstitucionales, ahí están nuestros votos, ahí están nuestras definiciones, en ese sentido, y en este caso sé que hay algunos proyectos de la Corte que pueden hablar sobre este asunto. Yo lo que digo que en el caso de este Pleno, de este Pleno, ya en su momento la Corte, evidentemente

tendrá su opinión, no hemos declarado inconstitucionales plazos menores por pensar que van a favor del ciudadano, son pro persona o del particular.

Pero bueno, por eso me opongo a este artículo 96.

Por otra parte, se difiere en considerar contrario las disposiciones de la Ley General los artículos relacionados con el procedimiento abreviado en la omisión de respuesta, es una cosa similar; del artículo 91, también esto está presente en el 99 fracción IV y en el 103.

Si bien es cierto que la ley local establece un proceso diferenciado para la admisión de respuesta el cual tiene una duración total de 13 días desde la presentación del recurso por omisión hasta el plazo para que el particular reciba la respuesta, lo cierto es que no excluye el derecho de presentar un recurso de revisión en contra de la respuesta emitida en cumplimiento a la resolución del proceso denominado exprés o abreviado, con lo cual el particular podría presentar una inconformidad puntual respecto a la respuesta notificada de manera extemporánea.

Se considera que aquellos artículos dan mayor certeza jurídica al titular y coadyuvan con el principio, otra vez, de expedites.

Suponiendo que un titular no recibió respuesta dentro de los primeros 15 días del plazo previsto en el artículo 49 de la Ley local, ni recibió una notificación de ampliación del plazo para la atención de la misma, por lo tanto presenta un recurso de revisión por omisión de respuesta en el día 16, si la resolución se cumple tendría una respuesta en un periodo máximo de 13 días adicionales.

Suponiendo que recibe respuesta en el último día para el cumplimiento de la resolución, habrían transcurrido los 13 días para recibir la respuesta, pues los plazos se contabilizan en este caso, desde la presentación, no desde la admisión.

Si el recurrente se encuentra inconforme con la respuesta podría presentar un nuevo recurso a revisión en un plazo que no exceda los 15 días precisando las inconformidades que en su caso tenga con la respuesta recibida, lo que permite acotar la Litis con mayor precisión.

Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto debe resolver de fondo el asunto en un plazo máximo de 40 días, 30 días como ya lo dije, más 10 días de posible ampliación, plazo total que es inferior en 20 días, como ya lo dije, a lo establecido en el ámbito federal para resolver, por lo tanto, si se considera el procedimiento para el recurso por omisión de respuesta que dura 13 días más el plazo de 40 días ya con la ampliación, el recurrente deberá esperar un máximo de 53 días para contar con la respuesta, mientras que en ámbito federal son un máximo de 60 días, los 40 más los 20.

Ahora, contando desde la presentación de la solicitud, los plazos acumulados máximos para que el particular pueda ejercer sus derechos ARCO es menor que el

dispuesto en la Ley General, pues desde la presentación de la solicitud hasta la emisión de la resolución del recurso, transcurren a lo máximo 87 días, en el caso, digamos, de la Ley General y que se aplica, digamos, aplicamos aquí, puede ser hasta en 90 días, 20 más 10 para la respuesta con ampliación, más 40 más 20 para la resolución con ampliación, obviamente puede ser el plazo menor y esto es a favor del particular en ese sentido, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones aquí mismo.

Por otra parte, tampoco se coincide considerar que el procedimiento abreviado concede plazos adicionales para otorgar respuesta, esto que se decía de un incentivo perverso, pues al no dar atención dentro del plazo máximo de los 30 días hábiles, 15 inicial más los 15 de ampliación, es causal de sanción conforme al artículo 127, fracción II de la Ley local el cual transcribo y dice así: “127. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de la presente ley las siguientes” y la fracción II dice: “Incumplir los plazos de atención previstos en la presente ley para responder las solicitudes, para el ejercicio de los derechos ARCO o para ser efectivo el derecho de que se trate”.

Me voy a saltar algunas para no, también, ya para finalizar, se difiere considerar contrario a la Ley General el artículo 98, como lo he dicho, pues la forma en la que se tramitará en el ámbito local del recurso de revisión es un asunto que compete sólo al ámbito local y no contraviene a la Ley General.

Se difiere por considerar como contrarios a la Ley General los artículos 106, 107 y 108 de la Ley local, para no hacer más referencias, simplemente tendríamos que tener que dichas regulaciones que están en estos tres artículos, están previstas de igual forma en los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales publicados, digamos, en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero del 2018 y aprobados por este Pleno por unanimidad y están en estos lineamientos estos mismos ordenamientos en el artículo 157, 160, 161 y 162 de dichos lineamientos.

Sería todo, señores Comisionados. Iba a mencionar algunas cuestiones positivas que tiene la Ley del Distrito Federal, pero las omito y con esto haré llegar mi voto particular que será esto que acabo de decir, nada más un poco de manera más ampliada.

Sería todo, gracias.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias al Comisionado Guerra Ford.

El Comisionado Joel Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: Sí, de forma muy breve, también estoy a favor de que se presente la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, emitiré un voto particular porque me aparto de algunos de los artículos que se están impugnando, sólo hago alusión a ellos, también en mi voto particular estará en las razones y los

motivos que coincide en algunos casos con los que ya fueron expuestos por el Comisionado Guerra y que tiene que ver con los plazos. Concretamente no acompaño el impugnar el 83, el 95, el 96, el 98, el 106, el 107 ni el 108.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias al Comisionado Joel Salas Suárez.

¿Ninguna otra?

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Perdón, ¿el artículo 83 está impugnado? Porque ahí sí yo también me voy a apartar, me aparto entonces, yo también hago mi reserva al respecto, por favor, en el artículo 83.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: Paty, yo entendía... también el artículo 15.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Sí, es lo que estoy revisando. No, en el artículo 15 no tengo, no, así no, es solamente en el 83 y me parece que tengo otro más, el 98, éste no se va a impugnar, está para impugnarse.

Bueno, entonces es el único en el que voy a establecer también mi...

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A ver, el Comisionado Eugenio Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Del proyecto original que tenemos, que nos han tenido a bien someter a consideración, se eliminaría el artículo 83, que ya hay una mayoría que se ha pronunciado pues no procede, por lo que queda en esos términos con los votos particulares, entendería yo, que aquí se han expuesto.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: No te escuché bien, ¿perdón?

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Que se elimina el 83 del proyecto original y el resto queda como tal, con los particulares expuestos.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Hay que apagar el micrófono de Patricia, se quedó encendido Patricia.

Gracias.

Bueno, entonces se ha podido conocer: tres Comisionados no van con el artículo 83, y de esta suerte, por esa aritmética, por esa posición, ya no se incluye, el proyecto se mantiene en lo restante, salvo las peculiaridades que ya adelantaron los Comisionados Joel Salas, Óscar Guerra y Patricia Kurczyn.

Así es que si es tan amable en someter a votación lo que queda de este proyecto, un proyecto que en origen se presentó.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Con su venía, Comisionado Presidente.

Por instrucciones del Comisionado Presidente, se pone a su consideración señora y señores Comisionados el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza instruir a su representante legal para que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los artículos 91, 93, 95, 96, 98 99, fracción IV, 103, 106, 107, 15, 44, 47, párrafo 1º, y 49, párrafo 2º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018, identificado con la clave ACT-PUB/02/05/2018.06, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionado Guerra.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: ¿Artículo 21?

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: No.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: El artículo 21 es donde el Comisionado Joel, la Comisionado Kurczyn y yo estamos de acuerdo.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Bien, se incluye el artículo 21 en la lista.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: Sí, el del aviso de privacidad.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Me permito volver a...

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: Nada más agrega ése.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Nada más que se confirme que quede el 21 incluido como un artículo que sí todos estamos considerando.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Cuete con ello.

Bien, le solicito al Comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto.

Comisionado Guerra, si nos da el sentido de su voto.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor, obviamente con mi voto particular que leí y haré llegar.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Bien.

Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Sí, ya también, con la observación. Gracias.

A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Bien.

Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor del proyecto también.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: Sí, a favor, con voto particular.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor del proyecto.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad, con los votos particulares del Comisionado Guerra y el Comisionado Salas, el acuerdo mencionado.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Gracias.

Secretario, haga ahora favor de dar cuenta del séptimo punto del Orden del Día.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Precisar, nada más, Comisionada Kurczyn, en el voto de la acción de inconstitucionalidad ¿su voto es particular?

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: (Inaudible)

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Se aprobó por el acuerdo.

Gracias.

Se hizo mayoría y se sumó al 21, sin el 83 y con el 21.

Procedo en consecuencia, poner en su consideración, señoras y señores Comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 2669/16, de fecha 24 de agosto del 2016, identificado con la clave ACT-PUB/02/05/2018.07, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionado Guerra.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: Comisionado Presidente Acuña.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.

Secretario Técnico del Pleno Hugo Alejandro Córdova Díaz: En consecuencia, se aprueba por unanimidad de la y los Comisionados, el acuerdo mencionado.

Es cuanto, Comisionado Presidente.

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas: Pues no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Sesión del Pleno de hoy, 2 de mayo de 2018, siendo las 14 con 30 minutos.

Nos vamos a Pleno privado.

--o0o--